

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: SUP-JDC-218/2008
ACTORA: JUANA CUSI SOLANA.
RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DEL DISTRITO
FEDERAL.
MAGISTRADO PONENTE:
CONSTANCIO CARRASCO DAZA
SECRETARIOS: FIDEL QUIÑONES
RODRÍGUEZ Y MAGALI
GONZÁLEZ GUILLÉN

México, Distrito Federal, a treinta de abril de dos mil ocho.

V I S T O S, para resolver el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-218/2008,
promovido por Juana Cusi Solana, por su propio derecho; y

R E S U L T A N D O:

[...]

El acto que, en opinión de la promovente le generó perjuicio,
consiste en la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Distrito
Federal el veintinueve de febrero de dos mil ocho, por la cual se
confirmó el dictamen de veintiséis de septiembre de dos mil siete,
emitido por la Comisión de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Acción Nacional, en el expediente CAI-
CEN/102/2007 y ratificado por el Comité Ejecutivo Nacional en la
sesión de ocho de octubre de ese año, relativo a la elección de
presidente y miembros del Comité Delegacional del propio instituto
político en Miguel Hidalgo, Distrito Federal.

[...]

C O N S I D E R A N D O:

[...]

TERCERO. Las consideraciones en que se sustenta la sentencia reclamada son del tenor literal siguiente:

[...]

CUARTO. Los agravios expresados por la actora son los siguientes:

[...]

QUINTO. Como cuestión previa, debe decirse que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, resulta factible suplir la deficiencia u omisión en los agravios, cuando éstos puedan derivarse claramente de los hechos expuestos en el escrito de demanda.

Las alegaciones expuestas por la actora en contra de la resolución impugnada, se basan en las siguientes cuestiones a destacar.

a) En los agravios identificados en su escrito de demanda con los números uno, dos y tres, **aduce que el Tribunal responsable no valoró todas sus pruebas que ofreció en el juicio ciudadano local**, porque en su concepto, privilegió el valor probatorio de la documental privada consistente en la renuncia presentada por Ramsés Inzunza Espinoza sobre las documentales que ella aportó al expediente, con las cuales, según su dicho, se demostraba la inelegibilidad de éste para ocupar el cargo a presidente del Comité Directivo Delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal.

[...]

c) Expone la enjuiciante que, la responsable le causó agravio al hacer una incorrecta valoración del padrón de militantes con derechos a salvo, expedido por el Comité Directivo Delegacional y la diversa documental privada que le fue entregada por el Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional.

[...]

Estima la actora que ese documento no era suficiente para que el Tribunal local considerara qué militantes contaban o no con sus derechos a salvo y poder votar en la asamblea delegacional, **ya que sólo con la cartilla de obligaciones de los militantes del Partido Acción Nacional se podía demostrar el status de éstos**, toda vez que la lista de miembros que se habían acreditado y registrado para la asamblea delegacional, en su opinión, no debió crear convicción en el ánimo del juzgador para arribar a la conclusión que llegó.

Indica que, un punto a destacar es el relativo a que la actora en su escrito de demanda del juicio ciudadano local, solicitó a la autoridad responsable requiriera al órgano partidista la cartilla de obligaciones de los militantes en Miguel Hidalgo, dado que como se ha venido mencionando, sólo con éste se creaba certeza del verdadero status de ellos, toda vez que, según la actora, las listas elaboradas a computadora y remitidas por el órgano partidista son fácilmente alterables para manejar arbitraria y discrecionalmente la salvedad de derechos de los militantes.

d) Esgrime la enjuiciante que la resolución impugnada le causa perjuicio, en la parte que menciona que aquélla no demostró que se haya convocado de forma extemporánea a diversos militantes para la celebración de la asamblea

delegacional y, en su caso, asistir a la misma para elegir al presidente y miembros del Comité Directivo Delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal.

Menciona que de conformidad con el artículo 1° de las normas complementarias, la notificación a la referida asamblea se debió de realizar de manera personal, derivado de lo anterior, **en su escrito inicial del medio de impugnación local, solicitó al tribunal responsable, requiriera al Comité Directivo Delegacional las constancias de notificación realizadas a los militantes de la delegación Miguel Hidalgo, y que no obstante ello, el órgano partidista, sólo remitió una relación elaborada a computadora en la que especificaba a qué militantes se había practicado la diligencia de notificación en forma personal y a quiénes no se logró convocar a ésta**, documento con el cual, la autoridad responsable señaló que le generaba plena convicción para determinar que se había notificado a los militantes de esa demarcación a la asamblea multicitada; situación que, en concepto de la promovente, le irroga perjuicio, toda vez que con tal relación el Comité Directivo Delegacional también pudo manipular de manera discrecional la notificación de los militantes a la asamblea.

[...]

SEXTO. Por cuestión de método, **en primer lugar se analizarán las violaciones procesales** que, según la actora, se cometieron dentro del juicio ciudadano local del que emana la resolución reclamada en este asunto, **y posteriormente se estudiarán las violaciones de forma que aduce se contienen en el propio fallo impugnado**; toda vez que, de resultar fundadas tales violaciones, ello traería como consecuencia lógica jurídica necesaria revocar la sentencia reclamada y ordenar a la

responsable subsanar dichas irregularidades, debiendo dictar nueva resolución, lo cual haría innecesario el examen de las violaciones de fondo alegadas.

Hecha la anterior precisión, esta Sala Superior considera que son **fundados** los agravios expuestos por la actora, en los que, en lo sustancial, manifiesta que le causa perjuicio el hecho que la autoridad responsable emitiera su fallo en el sentido que lo hizo, **sin contar con los elementos de prueba ofrecidos en su escrito inicial de demanda**, consistentes en la cartilla de obligaciones de los militantes del Partido Acción Nacional en Miguel Hidalgo, así como los acuses o constancias de notificación de éstos para la celebración de la asamblea delegacional, dado que, en su concepto, tales pruebas eran indispensables para que el tribunal responsable emitiera su fallo conforme a derecho. De igual forma **la omisión de pronunciarse sobre el agravio** relativo a la ampliación de su demanda.

[...]

En el caso concreto, como ha quedado precisado en el capítulo de antecedentes, el ocho de octubre de dos mil siete, la actora presentó ante el tribunal responsable demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, mediante el cual, entre otras probanzas, ofreció las pruebas que a continuación se describen, al considerarlas necesarias para la emisión del fallo correspondiente.

[...]

4. Copia certificada de los acuses de recibo, mediante los cuales se notifica personalmente a cada uno de los miembros activos del Partido Acción Nacional de la convocatoria y normas complementarias que rigieron la asamblea delegacional en Miguel Hidalgo.

[...]

6. Copia certificada de la Cartilla de obligaciones de la totalidad de miembros activos del Partido Acción Nacional en Miguel Hidalgo.

[...]

19. Copia certificada del acuerdo o resolución tomada, que permitió el registro de delegados numerarios fuera de los plazos establecidos en las normas complementarias, así como el acuse de recibo de dicha notificación a cada uno de los miembros activos del Partido Acción Nacional en Miguel Hidalgo.

[...]

En el propio escrito de demanda, la actora solicitó al tribunal electoral responsable requiriera al órgano intrapartidista correspondiente para que remitiera las citadas probanzas, tomando en cuenta que para esa fecha no le habían sido expedidas.

El Magistrado instructor del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en atención a la solicitud de la actora y a la necesidad de contar con todos los elementos para resolver el juicio ciudadano local, mediante acuerdo de tres de enero de dos mil ocho, **requirió, bajo apercibimiento de ley, al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional para que, dentro del plazo de siete días hábiles, contados a partir de que se le notificara dicho acuerdo, remitiera lo siguiente:**

[...]

Mediante escrito presentado en la oficialía de partes de la Secretaría General del Tribunal Electoral responsable, el catorce de enero de dos mil ocho, el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político, manifestó que daba cumplimiento al requerimiento formulado por el Magistrado instructor, remitiendo a dicha autoridad la documentación siguiente:

[...]

El tribunal responsable mediante proveído de quince de enero del año en curso, tuvo por recibidas las documentales antes mencionadas, **ordenando únicamente agregarlas** al expediente del juicio ciudadano local, **sin constatar** que tal documentación efectivamente correspondiera a la que fue requerida.

Debe resaltarse que la responsable en el referido acuerdo, en ningún momento ordenó dar vista a la actora en relación con las documentales remitidas por el órgano partidista en mención, a efecto de que manifestara lo que a su derecho correspondiera.

Finalmente, por diverso acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil ocho, el tribunal responsable admitió las pruebas ofrecidas por la actora en su escrito inicial de demanda.

De lo reseñado con antelación, es posible advertir que la actora en su demanda de juicio ciudadano local, dado que las **consideró indispensables** para la adecuada resolución de ese asunto, ofreció, entre otras pruebas, la cartilla de obligaciones de la totalidad de los miembros activos del Partido Acción Nacional en Miguel Hidalgo, así como los acuses de recibo de la notificación de la convocatoria a la **asamblea delegacional en Miguel Hidalgo** del veintiséis de agosto de dos siete, realizada a cada uno de los miembros activos del propio instituto político.

Asimismo, se desprende que en la propia demanda inicial, la enjuiciante solicitó al tribunal responsable requerir al órgano partidario correspondiente la remisión de las documentales antes precisadas, debido a que, hasta ese momento, no le habían sido expedidas a la promovente, a pesar de haberlas solicitado oportunamente; y que en virtud de dicha petición, la autoridad jurisdiccional responsable requirió al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional para que enviara las citadas constancias, apercibiéndola con la aplicación de una medida de apremio en caso de no cumplir dentro del término concedido.

No obstante, el referido órgano partidista remitió diversas constancias, no así las dos documentales precisadas que le fueron requeridas, sin que dicho órgano hubiera manifestado alguna causa justificada por la cual dejó de enviarlas, situación que pasó por alto el tribunal responsable, puesto que en su acuerdo de quince de enero del actual, tuvo por recibidas tales constancias y, por ende, por cumplido el aludido requerimiento.

También se evidencia que, el tribunal responsable omitió constatar si los documentos enviados por el órgano partidista efectivamente correspondían a los que fueron requeridos, tal como estaba constreñido a hacerlo dado su carácter de instructor del procedimiento, y de esta forma, estar en posibilidad de dictar todas las medidas necesarias para lograr recabar la documentación faltante. Incluso, el tribunal responsable ni siquiera ordenó dar vista a la enjuiciante con las documentales que fueron remitidas por el citado órgano partidista, a efecto de que hiciera valer lo que a sus intereses conviniera.

Las circunstancias apuntadas se tradujeron en que, finalmente las mencionadas probanzas se dejaron de recibir en el juicio ciudadano local, a pesar de que fueron ofrecidas oportunamente y que, en un principio, habían sido aceptadas por la responsable, si se toma en consideración que formuló el requerimiento respectivo para su obtención.

De lo anterior, se colige que la autoridad responsable no cumplió a cabalidad la garantía de audiencia consagrada en la Constitución Federal, dado que inobservó la formalidad esencial consistente en la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en el procedimiento de que se trate, si se tiene presente que dicho tribunal dejó de recibir determinadas probanzas ofrecidas por la actora, que, en un principio, había aceptado, tanto es así que las requirió directamente al órgano partidario respectivo, lo que vino a producir un estado de indefensión a la enjuiciante.

Máxime que, como se vio, en el acuerdo de quince de enero de dos mil siete, el tribunal responsable omitió dar vista a la actora mediante notificación personal, respecto de las pruebas remitidas por el Comité Ejecutivo Nacional, en atención al requerimiento que le fue formulado, a fin de que la accionante estuviera en aptitud de conocer todos los elementos convictivos con oportunidad y, en su caso, realizar las objeciones que estimara pertinentes o alegara lo que a su derecho conviniera, o bien, estuviera en aptitud de reiterar su solicitud ante la pretendida inconsistencia de las documentales remitidas.

Ello es así, atento a que todas las autoridades judiciales deben procurar que se asegure la protección y ejercicio de las garantías del debido proceso legal, lo que en el caso no aconteció.

Además, no debe perderse de vista que la violación apuntada trascendió al resultado del fallo, dado que la autoridad responsable confirmó el dictamen de veintiséis de septiembre de dos mil siete, emitido por la Comisión de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y ratificado el ocho de octubre de dos mil siete, relativo a la elección de presidente y miembros del Comité Delegacional en Miguel Hidalgo, tomando como base precisamente las diversas constancias remitidas por el órgano partidista, sin contar con las pruebas ofrecidas por la actora en su demanda del juicio ciudadano local, esto es, sin la cartilla de obligaciones de los militantes y los acuses de notificación de los miembros activos para la asamblea multicitada, las cuales como lo expresa la promovente, tenían como finalidad, crear convicción en el ánimo del juzgador para que emitiera una sentencia que declarara el derecho en controversia con la certeza plena de que contaba con los elementos probatorios idóneos para ese fin.

[...]

En segundo término, en el presente juicio en las normas complementarias a la convocatoria delegacional correspondiente, se estableció expresamente que éstas debían notificarse a todos los

miembros activos mediante comunicado que se hicieran llegar a sus domicilios con acuse de recibo respectivo, lo que no se dispuso en la convocatoria relacionada con el diverso juicio SUP-JDC-2428/2007; tanto es así, que en ese sentido se centró la litis en la instancia intrapartidaria y en el juicio ciudadano local, es decir, el órgano partidista responsable en ningún momento alegó que no fuera esa la forma de comunicación.

En otro orden, esta Sala Superior estima fundado el motivo de disenso relativo a la omisión en que incurrió el tribunal local responsable de dar respuesta al agravio atinente a la ampliación de su medio de impugnación intrapartidario.

En efecto, como se destacó en el relato de antecedentes efectuado en el considerando segundo de este fallo, el treinta y uno de agosto de dos mil siete, la actora interpuso medio de impugnación intrapartidista contra la asamblea delegacional celebrada el veintiséis de agosto del citado año, de conformidad con el artículo 38 de las Normas Complementarias.

Posteriormente, el catorce de septiembre de ese año, la enjuiciante presentó escrito de ampliación de su medio de impugnación, haciendo valer diversas irregularidades que afirmó desconocer a la interposición de su ocurso primigenio.

Ahora bien, del contenido del escrito de demanda del juicio ciudadano local, del que deriva el fallo impugnado, se aprecia que la actora, entre otros agravios, expresó que el órgano partidario responsable en el dictamen respectivo, omitió pronunciarse respecto de su escrito de ampliación del medio de impugnación intrapartidista, lo cual se tradujo en una violación a su garantía de acceso a la jurisdicción.

Del análisis integral de la sentencia que ahora se reclama, es posible advertir que, como lo sostiene la actora, el tribunal responsable no se ocupó del referido agravio, consistente en la falta de

pronunciamiento de la ampliación del medio impugnativo por parte del órgano partidario responsable, puesto que en ninguna parte de los considerandos del propio fallo, hizo alusión alguna a dicha inconformidad, sin que justifique tal proceder.

Dicha conducta omisiva del tribunal responsable se traduce en una violación formal de la sentencia reclamada, puesto que al soslayar aquel agravio, transgredió en perjuicio de la actora el principio rector en la emisión de las sentencias; esto es, el de exhaustividad.

En ese contexto, **las violaciones antes analizadas, trajeron como consecuencia el dictado de una resolución al margen del respeto al debido proceso legal** consagrado en la Carta Magna; por tanto, lo procedente es revocar la resolución impugnada y, en consecuencia, **con el fin de subsanar las violaciones cometidas, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, en uso de sus facultades y atribuciones, deberá, ordenar todas las diligencias necesarias para lograr recabar las probanzas ofrecidas por la enjuiciante** descritas anteriormente (cartilla de obligaciones de los miembros activos y los acuses de recibo de notificación de la convocatoria a la asamblea delegacional del 26 de agosto de 2007 realizada a dichos miembros), que omitió enviar el órgano partidario correspondiente, **a efecto de tomarlas en cuenta en el nuevo fallo** que dicte con plenitud de jurisdicción; además, en idénticos términos, **deberá pronunciarse sobre el agravio** relativo a la ampliación del medio de impugnación intrapartidista respectivo.

El sentido de este fallo obedece a que, como la responsable no las tuvo en consideración y la actora basa parte de su argumentación en esas pruebas, **las cuales encuentran asidero legal en la propia normatividad interna del partido, quien está obligado a requerirlas es el órgano jurisdiccional local, puesto que esta Sala Superior se encuentra imposibilitada para analizarlas, ya que esto implicaría substituirse en la actuación de la responsable, lo cual no resulta**

válido jurídicamente, dado que el presente juicio no constituye una renovación de la instancia local; máxime cuando en el caso se carece de elemento o circunstancia alguna que haga urgente la decisión de este asunto y, por ende, que justifique que este órgano jurisdiccional entre de raíz al estudio de aquellos aspectos omitidos por la responsable.

[...]